



13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal



Doha, 12 a 19 de abril de 2015

Distr. general
6 de abril de 2015
Español
Original: inglés

Tema 3 del programa provisional*

**Éxitos y problemas en la aplicación de políticas y
estrategias amplias de prevención del delito y justicia
penal para promover el estado de derecho a nivel nacional
e internacional, y para apoyar el desarrollo sostenible**

Resumen presentado por la Presidencia del Debate Temático de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Integración de la Prevención del Delito y la Justicia Penal en la Agenda para el Desarrollo después de 2015, celebrado en Nueva York el 25 de febrero de 2015

Nota de la Secretaría

I. Introducción

1. El Presidente de la Asamblea General convocó el Debate Temático de Alto Nivel sobre la Integración de la Prevención del Delito y la Justicia Penal en la Agenda para el Desarrollo después de 2015, que tuvo lugar en Nueva York el 25 de febrero de 2015. El debate se organizó a iniciativa de las misiones permanentes de Italia, Marruecos, Qatar y Tailandia, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

2. El objetivo del debate era deliberar acerca de la cuestión general de cómo afrontar los problemas socioeconómicos y promover el desarrollo sostenible mediante el fortalecimiento de los sistemas, las reglas y las normas de prevención del delito y justicia penal, al tiempo que se combaten las amenazas que los socavan, en particular la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito y la corrupción. Asimismo, el debate tuvo por objeto contribuir a las deliberaciones sobre la agenda para el desarrollo después de 2015, así como al 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebrará en Doha del 12 al 19 de abril de 2015.

* A/CONF.222/1.



II. Sesión de apertura

3. En la sesión de apertura del Debate Temático, los oradores resaltaron que en 2015 se celebraba el 70° aniversario de las Naciones Unidas, en cuya Carta se reafirmaba la “fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”. Los oradores observaron que, a pesar de esa proclamación solemne, muchas personas de todo el mundo seguían sufriendo las devastadoras consecuencias de la pobreza, la delincuencia, el terrorismo, la exclusión, la persecución, la corrupción y las privaciones.

4. Los oradores destacaron que esas personas necesitaban (y, sin duda, merecían) una gobernanza responsable, sistemas de justicia imparciales y accesibles, sociedades pacíficas, seguridad personal y una vida digna. Asimismo, destacaron que la comunidad internacional tenía el deber de ayudar a todas las personas a aprovechar esas oportunidades, entre otras cosas formulando una agenda universal para después de 2015 ambiciosa y transformadora que fuera inclusiva y se anclara firmemente en los derechos humanos y el estado de derecho.

5. En la sesión, los oradores subrayaron que un enfoque sostenible del desarrollo exigía que se formularan estrategias eficaces, integradas y multidimensionales. Pusieron de relieve que el carácter global y la complejidad de la delincuencia contemporánea exigían una respuesta colectiva mundial.

6. En ese contexto, los oradores señalaron que el 13° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebraría en abril de 2015, constituiría una oportunidad importante para que los Estados Miembros y las partes interesadas reafirmasen una respuesta mundial ante los retos que planteaban la prevención del delito y la justicia penal. Asimismo, subrayaron que el documento final del Congreso aportaría orientaciones en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal para los cinco años siguientes y renovaría la visión y compromiso comunes respecto de la instauración del estado de derecho y el ejercicio de los derechos humanos, así como de la promoción de unas sociedades pacíficas e incluyentes.

7. Los oradores indicaron que la delincuencia afectaba en mayor medida a los más vulnerables, como las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, así como a los marginados y los discriminados. Por ejemplo, observaron que algunos delitos como la corrupción impedían a muchas personas en todo el mundo gozar de los servicios básicos, dado que las privaban de oportunidades socioeconómicas y debilitaban todavía más unas instituciones ya de por sí frágiles.

8. En lo que respecta al estado de derecho, los oradores observaron que hacía tiempo que la comunidad internacional había reconocido su importancia, en particular para prevenir la delincuencia eficazmente y crear una base sólida de derechos humanos. Además, resaltaron que, en algunos casos, la ausencia o la carencia del estado de derecho era uno de los factores que impedían el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Así, destacaron que el estado de derecho era fundamental para promover las actividades de desarrollo a todos los niveles y un factor necesario para fortalecerlas. En ese sentido, pusieron de relieve la necesidad de integrar el estado de derecho como principio básico en la agenda para el desarrollo.

III. Mesas redondas

9. Las mesas redondas de la mañana y de la tarde se titularon, respectivamente, “En pro del desarrollo sostenible: éxitos y problemas en la aplicación de políticas amplias de prevención del delito y justicia penal” y “La configuración de la agenda para el desarrollo después de 2015: fomento de la cooperación internacional para promover las políticas de prevención del delito y justicia penal”.

10. Los mensajes de los participantes en ambas sesiones se resumen por tema a continuación.

A. Marco jurídico

11. Los oradores exhortaron a suscribir y aplicar plenamente todos los instrumentos internacionales pertinentes, entre los que se encontraban la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos y los tratados de fiscalización internacional de drogas. Asimismo, exhortaron a que se siguiera prestando apoyo al Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se preparaba para iniciar su segundo ciclo. Además, observaron que los marcos jurídicos internacionales antes mencionados y las reglas y normas en materia de justicia penal ofrecían una plataforma común para que los Estados Miembros combatiesen las formas graves de actividad delictiva, independientemente de las diferencias existentes en las tradiciones y los ordenamientos jurídicos, y dejaban un margen de flexibilidad para elaborar y aplicar políticas y estrategias de prevención del delito y justicia penal.

B. Implicación nacional

12. Los oradores destacaron que la implicación y el liderazgo nacionales auténticos eran esenciales para asegurar que las estrategias y las instituciones de prevención del delito y justicia penal promovieran eficazmente el estado de derecho y el desarrollo sostenible. Asimismo, señalaron la importancia de los sistemas de justicia tradicional o consuetudinaria, que solían funcionar en paralelo al sistema de justicia oficial. Además, recalcaron la importancia que revestía la plena independencia de los jueces, el poder judicial y los fiscales, así como su integridad. Finalmente, subrayaron la necesidad de que los gobiernos investigaran y analizaran la delincuencia en profundidad, lo que les permitiría adoptar decisiones eficaces en materia de políticas.

C. Participación pública

13. Los oradores señalaron que una participación pública amplia e incluyente, tanto en la elaboración como en la aplicación de estrategias de prevención del delito y justicia penal, era fundamental para que estas fuesen acertadas y resultasen eficaces. Hicieron especial hincapié en los más vulnerables de la sociedad, como las mujeres, los jóvenes y los pobres, así como las personas con discapacidad, y

observaron que un proceso verdaderamente incluyente, caracterizado por una participación auténtica, aumentaba la capacidad de las personas de contribuir a las opciones normativas que probablemente fuesen a afectarlas en mayor medida y de hacer rendir cuentas a las instituciones gubernamentales. Los oradores observaron que tal participación pública también podía contribuir a desarrollar y promover la cultura de la legalidad mediante la educación y el acceso a la información, lo que podía impulsar considerablemente la prevención del delito. Se hizo hincapié en particular en la importancia que revestía la participación de las organizaciones de la sociedad civil para exigir a los gobiernos que rindiesen cuentas respecto de los compromisos contraídos.

D. Cooperación y alianzas internacionales

14. Los oradores observaron que la cooperación internacional entre los Estados Miembros y la coordinación y la cooperación interinstitucionales eran fundamentales para combatir la delincuencia, que había adquirido un carácter más complejo y transnacional. En ese sentido, destacaron que la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional debía ir de la mano de un acceso efectivo a la justicia para todos, y también debía centrarse en fortalecer la capacidad de vigilancia de la trata de personas y el tráfico de armas, drogas, fauna y flora silvestres y bienes culturales, así como de las corrientes financieras ilícitas.

15. Los oradores reconocieron la importancia del Programa Mundial para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques de la UNODC y exhortaron a la comunidad internacional a que apoyase sus esfuerzos, incluidos los encaminados a promover la cooperación y las alianzas internacionales para reforzar los sistemas de justicia penal en el plano regional. Recalaron que la cooperación internacional eficaz comprendía las alianzas entre las fuerzas del orden, que implicaban, entre otras cosas, el intercambio de información, datos e información de inteligencia; la asistencia judicial recíproca en el sentido más amplio y procedimientos simplificados y eficientes, y procedimientos de extradición flexibles y en que se tuvieran en cuenta las diferencias entre ordenamientos jurídicos.

16. Además, los oradores observaron que el fortalecimiento de la aplicación de los tratados pertinentes, así como el papel de las organizaciones y los arreglos regionales y subregionales, eran componentes fundamentales para facilitar una cooperación internacional eficaz y eficiente. Exhortaron a reforzar las alianzas entre los gobiernos y otros donantes, los expertos del sector privado, las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, los medios de difusión y las instituciones académicas.

E. Asistencia técnica y fomento de la capacidad

17. Los oradores subrayaron la importancia que revestía la asistencia técnica para reforzar las estrategias e instituciones de prevención del delito y justicia penal, en particular en los Estados en desarrollo y en los que habían salido de un conflicto. Además, destacaron la necesidad de transferir la tecnología y el equipo necesarios para la represión del delito a fin de investigar y de afrontar con eficacia los

problemas que planteaba la actividad delictiva, cuya movilidad y complejidad eran cada vez mayores. En ese sentido, resaltaron la importancia de fortalecer la capacidad de la UNODC y expresaron su agradecimiento por las actividades en curso y la asistencia prestada por la UNODC, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

F. Preparación de indicadores

18. Los oradores señalaron que los objetivos y las metas que fueran a acordarse en la agenda para el desarrollo después de 2015, especialmente los relacionados con la prevención del delito y la justicia penal, así como con el estado de derecho, deberían ir acompañados de indicadores adecuados para que los Estados pudieran evaluar los progresos logrados en la aplicación, entre otras cosas indicadores de la eficacia de las instituciones de justicia penal. En particular, se afirmó que esto brindaba a la UNODC y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal una oportunidad real para prestar asesoramiento valioso sobre indicadores y parámetros técnicos en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal respecto de varios objetivos y metas que iban a integrarse en la agenda para el desarrollo después de 2015. En ese sentido, los oradores indicaron que la Comisión podía partir de los recursos e instrumentos existentes, incluidos los datos reunidos por la UNODC y otros organismos sobre las tendencias delictivas mundiales y el funcionamiento de los sistemas nacionales de justicia. Además, destacaron que los países en desarrollo y los que se encontraban en situaciones posteriores a conflictos necesitarían especialmente el apoyo y la asistencia internacionales para reforzar su capacidad de reunir datos, así como sus departamentos de estadística y análisis.

G. Propuestas concretas

19. Los participantes formularon las recomendaciones siguientes:

a) En los exámenes temáticos del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, bajo los auspicios del Consejo Económico y Social, debería tenerse en cuenta la labor normativa de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que debería transmitirse posteriormente a las juntas ejecutivas y los organismos especializados, fondos y programas para que apoyasen a los países en la aplicación de las orientaciones normativas;

b) Durante el período de sesiones en curso, la Asamblea General debería considerar la posibilidad de aprobar una resolución sobre el comercio ilícito de fauna y flora silvestres, que afecta negativamente al desarrollo sostenible, la biodiversidad y la estabilidad en algunas regiones;

c) En el Congreso deberían estudiarse las deficiencias inherentes a la aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales para combatir la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito y el terrorismo.

IV. Sesión de clausura

20. En sus observaciones finales, el Presidente de la Asamblea General destacó que, para cumplir sus promesas relativas al desarrollo sostenible, los Estados Miembros debían garantizar que las sociedades fuesen seguras y pacíficas, entre otras cosas mediante la promoción del estado de derecho y el fortalecimiento de los sistemas de justicia penal que respaldaban los principios fundamentales de la justicia, la imparcialidad y la igualdad.

21. El Presidente señaló que el 13º Congreso ofrecería una oportunidad histórica para continuar el debate sobre la importancia de integrar el estado de derecho y la justicia penal en el marco de la agenda para el desarrollo después de 2015.